

LOS QUE SUSCRIBEN, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS Y LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN I, 24, FRACCIÓN XIII, 25, FRACCIÓN I, 46, FRACCIÓN I, 48, FRACCIÓN I Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS, 9, FRACCIÓN I Y 95, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS, NOS PERMITIMOS SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA H. SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA LA “LEY DE AUSTRERIDAD REPUBLICANA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS”, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A propósito de que en este 2010 conmemoramos el bicentenario de la Independencia del país, ello debe ser motivo para una profunda reflexión de dicho acontecimiento histórico. Esto porque a raíz de que la conspiración de Querétaro fuera descubierta, el cura Miguel Hidalgo en septiembre de 1810 se lanzó a la guerra apoyado por una tropa de militares criollos, indígenas y campesinos, bajo el grito de «Viva la Virgen de Guadalupe, muerte al mal gobierno, abajo los gachupines», la revolución le llevaría por el camino de lo que sería una verdadera guerra independentista en busca de crear un Estado soberano e independiente capaz de minimizar las determinaciones del exterior y las profundas desigualdades sociales existentes.

En este tenor de ideas para recuperar lo mejor de la historia del país. Allí está el temple de los mexicanos, el programa popular y los ejemplos de quienes han sido los mejores dirigentes y gobernantes. ¿Acaso no es sencillo y suficientemente claro el postulado de José María Morelos de que debe moderarse la indigencia y la opulencia y elevarse el salario del peón?, ¿O su propuesta de que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario?

Estos postulados imprescindibles, a casi dos siglos de distancia, aún resultan fundamentales y de suma urgencia para ser aplicados en la República. Si se quiere edificar una sociedad más igualitaria y justa requerimos de una legislación que obligue a los poderes locales a sujetarse a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal.

En la época de los liberales hubo cierto júbilo por los principios honorables en las funciones públicas, esto ocurrió en la etapa que don Daniel Cossío Villegas denominó “La República Restaurada”, como ejemplo emblemático tenemos al presidente Benito Juárez García, quien decía que no era posible sostener una República más que con la honestidad de los servidores públicos y con la austeridad republicana en la administración pública.

Lamentablemente el legado de esta grandiosa generación de servidores y pensadores fue echada por la borda durante el régimen de Porfirio Díaz, que creó un sistema político entorno a su persona y como tal, la única manera de sostenerlo era mediante el otorgamiento de prebendas y regalías para los amigos, los compadres, los grandes empresarios y para la subordinada clase política que este sistema engendró.

En la época posrevolucionaria las prácticas nocivas para la vida pública siguieron siendo una constante, el poder omnímodo del Presidente fue el incentivo para ello, haciendo posible que, con ayuda del partido oficial, se monopolizara el poder no por la violencia ni la dictadura militar o policíaca, sino a través de un sistema hecho de calculados equilibrios, pesos y contrapesos. Esta solución fue más perfecta, más institucional que la de Díaz pero a cambio de una política de privilegios, estímulos y créditos, para empresarios y miembros de la clase política, que a su vez la reproducían en pequeña escala, y así se desviaban y perdían recursos públicos que se esfumaban por el caño de la corrupción y el tráfico de influencias.

Lo anterior ha sido y sigue siendo práctica cotidiana, que los servidores públicos al frente de las instituciones se provean de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, no previstos en la ley. Estos beneficios se suelen otorgar con apoyo en normatividades de dudosa constitucionalidad, que son aprobadas en cada institución, al margen de un control estricto.

Los legisladores del PT creemos con firmeza que es necesario hacer valer el principio político y ético consistente en que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía aristotélica y retomar el ejemplo de administraciones honestas y austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano Juarista.

México es aún un país de privilegios para unos cuantos y de enormes carencias para millones, la realidad dista mucho del discurso oficial: el país tiene más de 50 millones de pobres, de los cuales 10 millones cayeron en esa situación en los últimos tres años (Banco Mundial); la UNAM señala que los mexicanos en pobreza extrema pasaron de 15% a 23% en los últimos diez años, por lo que el país se encuentra hoy entre los 15 países con mayor desigualdad en el planeta; la crisis del año pasado arrojó a más de 3 millones de trabajadores al desempleo, a 12 millones al sector informal y a 3.5 millones al subempleo (INEGI); el poder adquisitivo de los trabajadores se deterioró 59% en diez años, es decir, el trabajo no sólo es escaso, sino mal pagado (CEOSM); entre 1983 y 2009 la tasa media de crecimiento del PIB ha sido apenas de 2.1% anual, en consecuencia, el PIB per cápita sólo ha crecido a 0.4% anual ; agreguemos que el Índice Nacional de Inseguridad (ICEI) pasó de 2.0 en 2004 a 2.5 en 2008, mientras que las ejecuciones vinculadas con el crimen organizado en los últimos cuatro años (2006- 2010) superan ya las más de 29 mil 500 muertes violentas.

Esta realidad tan complicada a nivel nacional es prácticamente un espejo en el Estado de Zacatecas. Basta decir que la propia Secretaría de Desarrollo Social señaló que el 20.9 por ciento de los habitantes del Estado de Zacatecas padecen pobreza alimentaria, es decir, que no ganan lo suficiente para comer.

El Estado ocupa el lugar número 16 en los indicadores de pobreza que maneja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) , por lo que 30 por ciento de la población zacatecana sufre pobreza alimentaria, 29 por ciento padece pobreza de capacidades, 53.6 por ciento es pobre patrimonialmente hablando y 56.4 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con Investigadores del doctorado en estudios del desarrollo y de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el Estado más de un tercio de la población vive en pobreza extrema, y no se descarta una crisis social a causa de la caída de las remesas de los miles de migrantes y las secuelas que dejó la crisis económica, que se ven agudizadas por los efectos de los recortes presupuestales, el crimen organizado y la sequía que golpeó duramente al campo .

A este de por sí ya caótico panorama, debemos agregar que la pasada administración estatal actuó con una enorme corrupción, nepotismo y el autoritarismo que contribuyó a agravar la difícil situación.

Nosotros queremos cambiar esta circunstancia porque somos conscientes de que no alcanzaremos la democracia, el estado de derecho o, la seguridad pública, mientras no moderemos la indigencia y la opulencia.

El Poder Legislativo local está obligado, política y éticamente, a responder de manera adecuada en tiempos de crisis social, y de estancamiento económico, para lo cual es necesario proyectar desde el Congreso –que es la representación popular por excelencia- actitudes y valores que fomenten las prácticas de ahorro y austeridad en el Estado que deben ir acompañados de una legislación estricta de austeridad presupuestal.

En Zacatecas no se cuenta con una legislación de esta naturaleza. Los ordenamientos que se han venido aprobando únicamente se han limitado a la expedición de lineamientos sobre disciplina y control del ejercicio presupuestario, en estricto sentido es ejemplar el esfuerzo, pero sus alcances son cortos y superficiales, por lo que los resultados no son claros ni cuantificados, y ello plantea la necesidad para que esta Legislatura apruebe una Ley como la que estamos proponiendo.

Esta iniciativa implica un esfuerzo de disciplina y compromiso con el servicio público, porque éste es eso; trabajadores y servidores del pueblo. Resulta inaceptable el marcado contraste entre las retribuciones de los servidores de alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población zacatecana a la que supuestamente sirven.

Si formulamos esta propuesta es porque queremos generar recursos presupuestales para el desarrollo económico y para la realización de los programas sociales en beneficio de más personas. Pero también porque estamos convencidos de que la manera de generar más equilibrio y justicia social entre los

zacatecanos, reside en alentar políticas de mayor igualdad salarial entre todos los sectores sociales del estado.

Zacatecas requiere de servidores públicos con vocación de servicio a los demás. El servicio público debiera ser una distinción en sí mismo y no la alta remuneración que aleja y confronta a los trabajadores del gobierno con los del pueblo al que debieran servir.

Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente.

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Esta Ley establece las reglas y principios de austeridad que deben cumplir los Poderes del Estado, los órganos autónomos y las diversas autoridades y entidades públicas estatales y municipales, independientemente de la naturaleza jurídica que posean.

La Auditoria Superior del Estado y los órganos de control interno de los entes arriba citados, se encuentran obligados a vigilar la debida observancia de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer disposiciones de carácter general para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en los tres poderes del Estado, órganos autónomos, autoridades estatales, municipales y demás entidades públicas. Lo anterior sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas y con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se considera servidor público a los representantes de elección popular estatales y municipales; los miembros del Poder Judicial del Estado; los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; los Magistrados de otros tribunales; los integrantes del Instituto Estatal Electoral, y en general, toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, al servicio de la administración pública centralizada y paraestatal; municipal y paramunicipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, al igual que a los que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que implique la utilización de recursos públicos o el ejercicio de competencias jurídicas de carácter estatal.

Artículo 4. Todos los ahorros generados por la aplicación de la presente Ley deberán concentrarse en un fondo especial cuya aplicación deberá destinarse, año con año, a cubrir el déficit en las finanzas públicas y generar el desarrollo de la inversión productiva estatal y la ampliación de los programas sociales, previa aprobación de la Legislatura.

CAPÍTULO II

De los servicios personales

Artículo 5. Se reducen en 50% las retribuciones o remuneraciones de los funcionarios públicos, en los términos de del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, desde el nivel jerárquico Secretario, Subsecretario, Director, Subdirector y homólogos, en los tres poderes del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el resto de las autoridades estatales, municipales y demás entidades públicas, independientemente de su naturaleza jurídica.

Para el caso de los municipios este artículo aplicara para los integrantes de los ayuntamientos y los tres primeros niveles de jerarquía administrativa.

Artículo 6. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias para ningún servidor público.

Artículo 7. Queda prohibida la creación de plazas de secretario privado, secretario técnico, coordinador, asesores o equivalentes.

Artículo 8. Queda prohibido el establecimiento de pensiones para servidores públicos distintas a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente.

Artículo 9. La contratación de prestadores de servicios profesionales en el poder legislativo, deberá sujetarse a los techos presupuestarios autorizados, conforme a los requerimientos mínimos establecidos para el trabajo legislativo. La contratación sólo será posible cuando no exista un servidor público que realice la misma función en un centro o instituto de estudio o investigación en la legislatura.

Artículo 10. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de recursos humanos:

- a) No se crearán nuevas plazas de estructura de mandos medios y superiores ni de los niveles homólogos a éstos.
- b) No se destinarán recursos del presupuesto para nuevas contrataciones.
- c) Los titulares de las autoridades previstas en los artículos 1 y 2 de esta Ley aprobarán durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal, las disposiciones específicas para limitar al mínimo indispensable las erogaciones de los recursos asignados a las contrataciones de personal eventual y de honorarios. Informarán de ello a los Órganos Internos de Control y a la Auditoría Superior del Estado.

Artículo 11. Queda prohibida la aprobación, reajuste y/o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

Artículo 12. En un plazo no mayor de 90 días naturales, la Auditoría Superior del Estado deberá elaborar y presentar a la Legislatura del Estado un proyecto de Tabulador Único de Percepciones de los servidores públicos referidos en el artículo 2

CAPÍTULO III

De los gastos en servicios generales y de orden social

Artículo 13. Los gastos de publicidad que lleven a cabo los Poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos, autoridades estatales, municipales y demás entidades públicas, no podrá rebasar el 20% del presupuesto en el ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 14. La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado se llevará a cabo de manera consolidada en cada uno de los poderes o entes públicos, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y oportunidad.

Artículo 15. Se eliminan los gastos por concepto de telefonía celular, remodelación de oficinas, estudios e investigaciones, arrendamiento de vehículos, aviones, equipo informático y pago de alimentación para funcionarios de mandos medios y superiores.

Artículo 16. Los poderes y organismos autónomos estatales estarán obligados a emitir normas que rijan la realización de viajes nacionales e internacionales, en las que indicarán:

- a) Los servidores públicos que pueden viajar;
- b) Los supuestos por los que se pueden autorizar;
- c) La justificación por parte del servidor público para viajar al extranjero;
- d) El monto máximo de los viáticos a otorgarse;
- e) La comprobación de viáticos conforme a los requisitos fiscales establecidos, y
- f) La prohibición expresa para utilizar servicios de transportación, alojamiento o alimentación de lujo o con precios superiores a los promedio del mercado.

Asimismo, se reducirá el monto del gasto para la realización de viajes internacionales y nacionales en un 50%, con relación al presupuesto en el ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 17. Las publicaciones, folletos, programas editoriales y similares, de todas las autoridades mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley, deberán ser impresas en papel reciclable, por lo que queda prohibido realizar publicaciones costosas y de lujo.

Artículo 18. Se prohíben las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, salvo aquellas de estricta necesidad para el cumplimiento de las tareas institucionales u oficiales.

Artículo 19. Queda prohibida la utilización de aeronaves privadas a cargo del presupuesto. Sólo los servidores públicos de mandos superiores podrán utilizar aeronaves comerciales, con excepción de aquellos funcionarios encargados de la seguridad, la atención a desastres naturales, o de la atención médica.

Artículo 20. Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo obsequios con cargo al Presupuesto de Egresos, salvo en el caso del otorgamiento de obsequios en visitas de Estado o de otra índole, que por razones de protocolo así corresponda.

Artículo 21. Las instituciones referidas y sujetas al imperio de esta ley, se abstendrán de realizar con cargo al Presupuesto de Egresos, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 22. Se prohíbe la adquisición de vehículos de último modelo o de lujo para el uso de los servidores públicos.

Artículo 23. Las dependencias y entidades deberán enajenar los bienes muebles, inmuebles que consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho.

CAPÍTULO IV

De los controles y disciplina en el ejercicio del gasto público

Artículo 24. La Oficialía Mayor o equivalente en las dependencias, entidades, órganos autónomos, y poderes del Estado, deberá establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestario, con el objeto de coordinar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.

Artículo 25. Las contrataciones, adquisiciones y proyectos de inversión con carácter plurianual, deberán ser incluidas invariablemente en apartado específico y debidamente justificado del Proyecto de Presupuesto de Egresos que cada ejercicio fiscal se presente a la Legislatura del Estado, y la ejecución e implementación de los mismos queda sujeta a su aprobación en el Decreto de Presupuesto de Egresos.

Artículo 26. No se podrán realizar transferencias presupuestales de gasto de capital a gasto corriente, ni de programas estratégicos y prioritarios a programas de orden administrativo. Las transferencias entre partidas del mismo capítulo de gasto deberán ser autorizadas invariablemente por los titulares de las instituciones referidas en el artículo 1º de la presente Ley e informarse a los órganos internos de control.

Artículo 27. El total de las transferencias internas de las instituciones referidas y sujetas al imperio de esta ley, no deberá rebasar el 15% del presupuesto modificado para el ejercicio fiscal en curso, en el caso de que las transferencias internas rebasen el 15%, el órgano interno de control de la institución de que se trate, deberá informar a la Legislatura del Estado para que esta proceda a sancionar como corresponde, en el momento en que el supuesto se actualice.

CAPÍTULO V

De los fideicomisos y donativos

Artículo 28. Se exhorta a los municipios a generar ahorros en gasto corriente no prioritario por el equivalente al 5% de las participaciones federales del Ramo 28 para entidades federativas y municipios.

Artículo 29. Queda prohibida la constitución de Fideicomisos con recursos públicos. Los fideicomisos ya constituidos se sujetarán a lo siguiente:

- a) No podrán incrementar sus fondos con recursos públicos.
- b) Las autoridades federales referidas en el artículo 1º de esta Ley, deberán presentar en sus respectivas cuentas públicas, un informe pormenorizado sobre el comportamiento financiero y el destino de los recursos de los Fideicomisos con los que cuenten. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado integrará en la Cuenta Pública Estatal de cada ejercicio fiscal, un apartado exclusivo con los informes de todos los Fideicomisos constituidos con recursos públicos.
- c) Artículo 30. Los poderes del estado, los órganos autónomos, ayuntamientos y demás entes estatales y municipales no podrán, por regla general, otorgar donativos. Se requerirá autorización expresa de su órgano de gobierno superior para realizarlos, siempre y cuando sea para un fin público.

CAPÍTULO VI

De las responsabilidades y sanciones

Artículo 31. Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones previstas en esta Ley incurrirán en las responsabilidades políticas, administrativas o penales que determine el ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO VII

Deberes y pautas de Comportamiento Ético y Austeridad Republicana

Artículo 32. Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético y austeridad republicana:

- a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución, las leyes y los reglamentos derivados de ella, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
- b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
- c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
- d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
- e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir la información;
- f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar la información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;
- g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
- h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y racionalidad.

CAPÍTULO VIII

La Comisión Estatal de Ética Pública y Austeridad Republicana

Artículo 33. Se crea en el ámbito de la Legislatura Local, la Comisión Estatal de Ética Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras instituciones, en los términos de éste y otros ordenamientos.

Artículo 34. La Comisión será honoraria y estará integrada por 10 integrantes, los cuales serán designados por dos tercios de sus miembros presentes.

Artículo 35. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

- a) Recibir las denuncias de ciudadanos o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios de la administración o representantes de cualquiera de los Poderes, contrarias a la ética pública.
- b) Establecer un programa de revisión de sueldos, salarios y ajustes en el tabulador, que permitan una reducción sustantiva de los sueldos y prestaciones de la administración pública.
- c) Establecer un programa de comparación de estructuras y de reducción del número de plazas de mandos superiores. Estudiar la posible duplicidad de funciones y cargos en las distintas ramas de la administración pública, y plantear la eliminación de los que resultaran excesivos o inútiles.
- d) Establecer un escalafón de salarios para todos los funcionarios comprendidos en el artículo 2 de la presente Ley.
- e) Asesorar y desahogar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente Ley;
- f) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión.

TRANSITORIOS

Primero. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

Tercero. La Legislatura al aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011 y los subsecuentes, realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

Cuarto. Se eliminan las erogaciones de las partidas del Presupuesto, destinadas al pago de los seguros de gastos médicos privados.

Quinto. Se eliminan las erogaciones destinadas al pago del seguro de separación individualizado, y seguro de vida de los funcionarios públicos referidos en el artículo 2 de la presente Ley.

Sexto. En un término no mayor de 90 días naturales, la Auditoría Superior del Estado deberá elaborar y presentar a la Legislatura un Proyecto de Manual Único de Prestaciones al que deberán sujetarse todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado, los órganos autónomos y demás autoridades y servidores públicos estatales.

Séptimo. Todas las autoridades mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley, elaborarán en un plazo no mayor a 60 días naturales, un Programa de Reducción y Ahorro equivalente al 30% del gasto ejercido en 2010 en las partidas de servicios telefónicos, conducción de señales analógicas, agua, luz, combustibles, fotocopiado, papelería, materiales y suministros en general, renta de inmuebles, servicio de vigilancia, compra de uniformes y pasajes. Informarán de ello al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior del Estado.

Octavo. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado elaborará y presentará a la Legislatura, en un término no mayor de 90 días naturales, un planteamiento con las siguientes características:

- a) Determinar y justificar la obligatoriedad y necesidad en la permanencia de Fideicomisos adscritos al sector público.

b) Determinar y proponer aquellos Fideicomisos que deban ser extinguidos, derivado de que su constitución y operación no se justifique plenamente o no corresponda a fines públicos.

Noveno. La legislatura del Estado dentro de los 120 días a la entrada en vigencia de la presente Ley, llevara a cabo las modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el régimen de contrataciones del Estado y municipios y a perfeccionar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

Recinto Legislativo, martes 28 de septiembre de 2010.

Dip. Saúl Monreal Ávila.
Coordinador Grupo Parlamentario
Dip. Gustavo Muñoz Mena
Subcoordinador Grupo Parlamentario
Dip. Benjamín Medrano Quezada
Integrante Grupo Parlamentario
Dip. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre
Integrante Grupo Parlamentario